



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA.
UNIDAD GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL

“2022, año de Ricardo Flores Magón”

Asunto: Notificación de respuesta

Folio PNT: 330030522000202

Folio interno: UT-J/0105/2022

Ciudad de México, a 31 de enero de 2022

Apreciable solicitante

P r e s e n t e

Con relación a su solicitud de acceso a la información, en la cual pidió:

“1.- Si a la luz de lo dispuesto en el artículo 41 fracción IV de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de 29 de Junio de 2021, dictada por el Tribunal Pleno de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 121/2019, se extienden a las disposiciones en materia de educación indígena e inclusiva, contenidas en el Reglamento Interior de la SEP, expedido por el Ejecutivo Federal para efectos de que la dependencia ejerza las atribuciones que le confieren, entre otras la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Educación;

2.- Fecha en la que perderán vigencia los capítulos y artículos declarados inválidos en el resolutivo TERCERO de la sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 29 de junio de 2021, en la Acción de Inconstitucionalidad 121/2019, notificada para efectos legales el día 30 de junio de 2021.

3.- En relación con el planteamiento anterior, si durante los 18 meses a que hace referencia el resolutivo CUARTO de la sentencia de mérito la legislación invalidada puede seguir siendo aplicada sin restricción alguna por parte de las Autoridades Educativas Federales, Estatales y Municipales.

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 121/2019, de fecha 29 de junio de 2021. ”

Respuesta

Le comunico que tales cuestionamientos, vinculados con la **tramitación e investigación** hasta la resolución tiene contemplado la aplicación del artículo violado, no satisfacen los supuestos legales para ser considerados como una solicitud de acceso a la información pública, toda vez que realiza una serie de cuestionamientos de carácter subjetivo respecto de situaciones específicas que implican y/o requieren de análisis para un pronunciamiento u opinión concreta, sin que éstos se traduzcan en información pública de conformidad con el artículo 124 fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), por lo tanto, no encuentran cauce a través del ejercicio de derecho de acceso a la información.

Al respecto, es importante tener en cuenta que el derecho de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. En ese sentido, toda la información generada, obtenida,



adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, tal como lo establece el artículo 4 de la propia Ley General.

Es importante señalar que los documentos se definen como los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados; mientras que la información pública se define como aquella que es generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los propios sujetos obligados¹.

Sin embargo, su petición requiere conocer una explicación u opinión de relativo a diversos cuestionamientos, que se plantea a partir de oraciones interrogativas que contienen expresiones que implican situaciones específicas y/o consideraciones particulares; debiendo considerar que las explicaciones u opiniones requeridas no constituyen información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de este Alto Tribunal y, por tanto, tampoco constan en algún documento en términos de las disposiciones legales en la materia.

Esto es así si se considera que, desde una perspectiva semántica, las explicaciones u opiniones implican la manifestación de la causa, motivo o alcance de algo y distan de constituir información pública en la medida que ésta se genera de antemano y derivado del despliegue de las facultades, competencias o funciones de los sujetos obligados, ninguna de las cuales se involucra en el caso concreto.

Sobre este tipo de consultas, el Comité Especializado de Ministros ha confirmado que las solicitudes de acceso a la información van encaminadas al suministro de un documento en concreto y preexistente, en posesión del sujeto obligado y derivado del ejercicio de sus funciones, lo cual no se desprende de su solicitud de información.²

Incluso, el referido Comité Especializado de Ministros ha establecido que cuando resulta necesaria la emisión de un pronunciamiento específico y particular efectuado a partir de un estudio y análisis racional, y no la entrega de un documento específico, una solicitud de acceso a la información no tiene dicho alcance, pues ésta exclusivamente comprende el suministro de un documento en concreto y preexistente, en posesión del sujeto obligado derivado del ejercicio de sus funciones, tal como se establece en las leyes de la materia.³

Sin demérito de lo anterior, bajo el principio de máxima publicidad y a partir de una interpretación que garantice su derecho de acceso a la información desde la perspectiva de una expresión documental bajo

¹ Artículo 3, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Criterio del entonces Comité de Acceso a la Información de este Alto Tribunal, a **través del Criterio 03/2003, ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO NO GARANTIZA OBTENER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LOS ACTOS DE UN ÓRGANO DEL ESTADO O SOBRE LA INTERPRETACIÓN QUE DEBE DARSE A UN DETERMINADO PRECEPTO LEGAL, SALVO QUE EXISTA UN DOCUMENTO EN EL QUE PREVIAMENTE SE HAYAN REALIZADO ESOS ACTOS.** Tomando en cuenta que el derecho de acceso a la información tiene como finalidad permitir a los gobernados conocer las determinaciones y decisiones de los órganos del Estado así como el contenido de los diversos actos jurídicos que realiza y que en términos de lo previsto en el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental los órganos del Estado únicamente están obligados a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, debe concluirse que la prerrogativa en comento de ninguna manera confiere el derecho a obtener algún pronunciamiento sobre la justificación legal de los actos de un órgano del Estado o, menos aún, sobre la interpretación de alguna disposición del marco constitucional y legal que los regula, salvo que tal pronunciamiento o interpretación consten en un documento que se haya elaborado previamente por el órgano competente para pronunciarse sobre los aspectos solicitados.

Clasificación de información 2/2003-A, derivada de la solicitud presentada por Laura Carrillo Anaya.- 24 de septiembre de 2003.- Unanimidad de votos, visible en la liga: <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2017-06/02-2003-A.pdf>.

² La distinción ha quedado establecida por la Presidencia del Comité Especializado de este Alto Tribunal al pronunciarse en el recurso de revisión CESCJN/REV-41/2020..

³ Esta delimitación quedó plasmada por la Presidencia del Comité Especializado de este Alto Tribunal al pronunciarse en el recurso de revisión CESCJN/REV-1/2021.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA.
UNIDAD GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL

resguardo de este Alto Tribunal, ⁴ hago de su conocimiento que las sentencias definitivas dictadas en cada uno de los asuntos de la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pueden consultar a través del sitio: “Sentencias y Datos de Expedientes”, ubicado en el enlace electrónico: <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/TematicaPub.aspx>

El formato de consulta le permitirá recuperar la información alojada en dicho repositorio, de manera sistematizada bajo diversos criterios, incluido el “Tipo de asunto”; además, en cada uno de los engroses podrá localizar el tipo de asunto y el sentido de la votación de las Ministras y Ministros que intervinieron.

Por lo anterior se concluye que su solicitud, **no encuadra** en los supuestos legales para ser considerada una solicitud de acceso a la información, toda vez que lo requerido a este Alto Tribunal consiste en un pronunciamiento vinculado con una consulta o interrogante específica que formula en su petición, misma que escapa de la tutela del derecho de acceso a la información, sin hacer referencia concreta a uno o más documentos individualmente identificados que pudieren o debieren hallarse bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente, y en caso de ser de su interés **la resolución definitiva y los datos principales de la Acción de Inconstitucionalidad 121/2019**, hago de su conocimiento que dicha información es pública, y se encuentra disponible a través del portal de internet de este Alto Tribunal <https://www.scjn.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx>, en específico en el siguiente vínculo:

- <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=265214>

No obstante lo anterior, en aras de garantizar su derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 6o. constitucional, por medio de la presente comunicación, **se remite la resolución definitiva**.

Modalidad de entrega.

La modalidad de entrega elegida por usted es: **Correo electrónico**.

Fundamento.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 130 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 9 del Acuerdo General de Administración 05/2015, del tres de noviembre de dos mil quince, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

⁴ Sirve como referencia el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales identificado con el número 16/2017 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, bajo el rubro: EXPRESIÓN DOCUMENTAL.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA.
UNIDAD GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL

Sin más por el momento, esperamos que la información otorgada le sea de utilidad.

A t e n t a m e n t e

Maestro Carlos Ernesto Maraveles Tovar
Subdirector General de Transparencia y Acceso a la Información

Actividad	Nombre del servidor público	Cargo	Rúbrica
Revisó:	Ariadna Avendaño Arellano	Directora de Acceso a la Información	
Elaboró:	Roberto C Carvallo Fragoso	Profesional Operativo	